

## **El ataque a La Tablada**

### **La hipótesis de “la patrulla perdida”**

Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los episodios más controvertidos de los años ochenta. Sobre el que se han tejido las más diversas hipótesis: una operación de inteligencia del Ejército, un montaje que se le escapó de las manos al propio gobierno radical, un intento de cubanos y/o nicaragüenses de retomar la iniciativa perdida en la región, etc. Y sin embargo hasta el día de hoy no existe mayor información para afirmar ni para desmentir ninguna de ellas. Las explicaciones disponibles son en gran medida aproximativas o especulativas. Finalmente, ha sido tan escasa, sino nula, la información novedosa surgida en los más de veinte años transcurridos desde el hecho, sea de los servicios de inteligencia como de los gobiernos, militares y demás actores involucrados, que sólo cabría sostener una de dos hipótesis contrapuestas: o bien nos enfrentamos al secreto mejor guardado de uno o de varios de esos poderes ocultos, o se trató, más simplemente, del accionar de una “patrulla perdida”, un pequeño grupo guerrillero que tomó sus decisiones y actuó completamente aislado. En lo que sigue intentaremos sostener esta segunda explicación, a partir de la información que logramos reunir de distintas fuentes.

En el año 2008 el Programa de Historia Política (PHP), a través del convenio establecido con el National Security Archive, realizó una serie de pedidos de desclasificación de documentos sobre el tema. Los pedidos se dirigieron al Departamento de Estado, aunque se incluyó documentación que estuviera en su poder y hubieran producido otros organismos. Simultáneamente, el PHP realizó una serie de entrevistas a participantes directos en los sucesos (funcionarios del gobierno de Alfonsín, miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP), oficiales militares). El resultado es un conjunto de piezas del rompecabezas que permiten asomarse al episodio con algo más de fundamento, aunque todavía se esté lejos de tener completo el cuadro.

Este capítulo, por tanto, tiene algunas particularidades respecto a los anteriores. Por un lado, es mucho más un esbozo preliminar que un análisis exhaustivo. En segundo lugar,

combina en mayor medida que aquellos, datos brindados por documentos desclasificados con otras fuentes, principalmente orales. Y finalmente y en consecuencia, concluye en una serie de preguntas que podrían ser la base de una investigación más amplia, tanto respecto al hecho en sí como a sus implicancias para el proceso político argentino.

Hechas estas salvedades, empezaremos por analizar los hechos **tal como hemos podido desentrañarlos** sobre la base de la información reunida; a continuación estudiaremos el impacto que el ataque a La Tablada tuvo en la política doméstica y en la política internacional, y las ligazones que pudo tener en ambos terrenos; por último plantearemos algunas conclusiones e interrogantes.

### **El 23-01-89 y su contexto**

*“Siempre de la genialidad a la locura hay un paso”*

(Roberto Felicetti, dirigente del MTP)

*Revista Sudestada, Nro. 95, Diciembre de 2010)*

El 23 de enero de 1989 unos sesenta miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP), una agrupación que reunía a ex guerrilleros de los años setenta, activistas de los derechos humanos y militantes universitarios de izquierda revolucionaria, asaltaron los cuarteles del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano y del Escuadrón de Exploración Blindado 1, situados en La Tablada, unidades de considerable importancia tanto por las armas pesadas que poseían, como por su ubicación en las cercanías de la Capital Federal. Esas unidades, aclaremos **además**, tenían una significación política particular, imposible de obviar, dado que se habían autoacuartelado en apoyo al movimiento carapintada poco tiempo antes, en septiembre de 1987.

Los asaltantes al cuartel eran liderados desde la clandestinidad por Enrique Gorriarán Merlo, sobreviviente de la conducción del ERP-PRT. Reunían a buena parte de los cuadros sobrevivientes del sector minoritario del diezmado ERP que se habían negado a

acompañar las decisiones tomadas por la mayoría de la conducción de dicha organización desde el exilio entre 1977 y 1979, dirigidas primero a replegarse y luego a disolverse. Ese proceso de autocrítica y dispersión, conducido por un histórico adversario interno de Gorriarán Merlo, Luis Mattini, supuso una intensa discusión sobre la legitimidad y eficacia de la lucha armada, que llevaría a muchos de sus cuadros a revisar también las tesis revolucionarias y redireccionar su acción política hacia la defensa de las instituciones democráticas. Pero mientras esto sucedía, Gorriarán Merlo y sus seguidores tomaron la dirección opuesta: optaron por sumarse a la experiencia guerrillera que estaba en ese momento a punto de triunfar en Nicaragua. Al poco tiempo, se convirtieron en oficiales del Ejército Sandinista e incluso actuaron en cargos jerárquicos de sus servicios de inteligencia y policía (19890127 Nosiglia specifies ties). En esa condición fueron también los responsables de montar y ejecutar la operación que terminó con la vida de Anastasio Somoza en Paraguay, en 1980.

Iniciada la democratización en Argentina varios de ellos volvieron al país y crearon una nueva organización, el Movimiento Todos por la Patria, que comenzó a reclutar militantes en las universidades y los barrios populares. El MTP no reivindicó abiertamente la lucha armada, pero sí la tradición revolucionaria de la izquierda radical, combinando planteos guevaristas con el populismo propio del peronismo de base y del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Precisamente, la cara visible más reconocida de la organización fue desde un comienzo el sacerdote católico Antonio Puigjané. Además, se le incorporaron algunos ex militantes de base del ERP-PRT que habían, hasta entonces, trabajado en el Partido Intransigente y el movimiento de derechos humanos. En poco tiempo, llegaría a tener cierta presencia pública y contar con un par de cientos de militantes encuadrados, con los cuales logró una modesta presencia e intervención en la vida estudiantil y en algunas protestas en barrios del conurbano o en poblaciones del interior del país.

Todo hace pensar que en el MTP convivían dos apuestas distintas, de un lado la de quienes lo entendían como una vía para incorporarse a la lucha política legal, algo tardía, pero no por ello menos sinceramente. Y la de quienes apostaban en cambio a mantenerlo

sólo como organización de superficie de un núcleo y una estrategia de carácter clandestino, a la espera de que se volvieran a abrir circunstancias favorables para la lucha armada en el país. La convivencia entre ambas tesituras fue medianamente armónica hasta que a los integrantes de este segundo sector, conducido desde las sombras por Gorriarán Merlo, les pareció que ese cambio de circunstancias había llegado: a partir de las sublevaciones militares, que se iniciaron en la Semana Santa de 1987 y continuaron a lo largo de 1988, pareció haber llegado el momento para “armar a la democracia”. Lo que significaba esto aún estaba por verse, pero los conflictos internos que se dispararon en el MTP dan a entender que el paso a la acción no sería lejano: de allí, que cuando se pretendió “blanquear” el rol de conducción que ejercía Gorriarán Merlo, a fines de 1987, quienes integraban el primer sector, llamémoslo “legalista”, se alejaron de la organización, advirtiendo sobre el “vanguardismo” o “aventurerismo” que animaba a quienes permanecieron en ella.

Esta crisis tuvo un efecto público desfavorable para el MTP. Debilitó su prestigio entre los sectores moderados de la izquierda argentina y sus vínculos con el resto de los actores sociales y políticos. Pero, al mismo tiempo, reforzó la cohesión de la conducción en torno a retomar la acción armada. Y de algún modo la alentó a actuar en esa dirección: había que demostrar en los hechos que la razón estaba de su lado y que había valido la pena la ruptura. Fue en este marco que se preparó el plan para tomar por asalto La Tablada.

La operación en sí consistió en la combinación de una acción militar orientada a hacerse de armamento, con una acción de masas dirigida a lograr la movilización popular en apoyo de la anterior. La primera estuvo a cargo del grupo más numeroso y convencido de los militantes, en que se mezclaron cuadros con alguna experiencia militar con jóvenes de la organización de superficie que se anoticiaron de la naturaleza de la operación muy poco antes de su concreción. La segunda se le encargó al resto de los miembros de la organización de superficie.

La pieza clave del operativo no era, sin embargo, ninguna de esas, sino la que articulaba ambas iniciativas y más preciadamente se mantuvo en secreto: ella consistía en

una operación de propaganda que debía desorientar al enemigo, dar una justificación pública al asalto del cuartel y, en consecuencia, alentar a la población a movilizarse. Concretamente, implicó la distribución, en las inmediaciones de La Tablada, de volantes que simulaban un nuevo alzamiento carapintada, firmados por militares rebeldes que anunciaban su pretensión de poner fin a la vigencia de las instituciones, y falsos comunicados a los medios que simulaban una proclama golpista de similar contenido (Gorriarán Merlo, entrevistado por el AHO en 2004 y 2005, reconocería la autoría de los primeros, justificándolos como “táctica militar”, al respecto, véase también Hilb, 2007 **¿que texto?**). Ello era la conclusión de una intensa campaña que se había venido realizando en los medios de comunicación en las semanas previas, orquestada por algunos cuadros selectos del MTP, en la que se había anticipado que ese golpe era inminente y tendría éxito si no se producía un drástico cambio de actitud de las fuerzas civiles y de la población. Los volantes debían actuar, en suma, como la chispa que disparara la bomba informativa de un golpe en marcha, consecuencia final de la serie de sublevaciones carapintadas producidas desde Semana Santa de 1987 y de la incapacidad de los demás actores civiles para detenerla.

Bomba ésta para la que ya estaba preparada una respuesta “popular”: casi simultáneamente, el resto de los militantes del MTP, actuando a ciegas respecto a la naturaleza del conjunto de la operación, comenzaron a recorrer las barriadas populares cercanas al cuartel, y otras en que tenían alguna inserción, distribuyendo otros volantes y lanzando proclamas por altavoces, en que se convocaba a la población a resistir el golpe, a ocupar los cuarteles y tomar las armas “en defensa de la democracia”, marchando a Plaza de Mayo para “sostener a las autoridades constitucionales”.

Mientras esto sucedía, y como “dando el ejemplo”, el grupo armado secuestró varios vehículos e irrumpió en el cuartel, que lograría controlar parcialmente durante unas horas. Esperó allí la movilización de masas que se preveía conducir hacia el centro de la ciudad, con las armas en la mano. Ello los erigiría en garantes de la permanencia de Alfonsín en su cargo, pero rodeado ahora del pueblo movilizado, que con sus permanentes concesiones al poder militar había ido enajenándose. Lo que, siempre según el ocurrente

plan, lo obligaría a hacer la revolución que hacía falta para que su promesa de lograr una democracia participativa con justicia social se cumpliera. De este modo, **en suma**, el “equilibrio de poder” que supuestamente existía, se rompería a favor de “los sectores populares”, y el MTP, como factor desequilibrante, se autocatapultaría a ejercer la conducción de los mismos.

El grupo armado que pergeñó esta arriesgada apuesta le tomaba **de esta forma** la palabra a las promesas de la transición democrática, en el sentido de que promovería una “democracia participativa” y no “meramente formal”, con el pueblo movilizado y “cargada de valores”, entre los cuales destacaba el de la justicia social. Aunque lo hacía en una variante que no podía considerarse compatible con las reglas de juego constitucionales. Dado que el recurso a las armas se habría vuelto, en caso de tener éxito, esencial para dirimir los conflictos que la sociedad atravesaba, y se podía esperar, su uso por parte de actores extra estatales adquiriría en la nueva situación plena legitimidad.

Tras varias horas de confusión, en que quedó expuesta la escasez de recursos con que contaban los actores políticos e institucionales para informarse y controlar la situación que se vivía, el Ejército lanzó una operación inclemente para recuperar el regimiento. Horas antes de que la misma se iniciara, el jefe de la Policía Federal propuso a Alfonsín utilizar gases lacrimógenos, pero sus efectivos y los de la Policía Bonaerense, que habían llegado prontamente a rodear la base, fueron alejados por unidades de comandos del Ejército que entraron en el recinto utilizando tanques, proyectiles de fósforo y, según numerosos testimonios, ultimaron a varios ocupantes heridos o que se habían rendido. Varios conscriptos, suboficiales y oficiales habían muerto al resistir el copamiento. Para la mañana del día 24, cuando concluyeron las operaciones, 39 personas habían perdido la vida (al menos 3 seguirían desaparecidas) y había más de 50 heridos. De los muertos, 28 pertenecían al grupo atacante, 9 eran militares y los otros dos, policías de la provincia de Buenos Aires. Además, veinte militantes del MTP serían detenidos y juzgados por el ataque (la mayor parte de ellos recibiría largas condenas, por haber estado directamente involucrados en el ataque y **se les aplicaría** la Ley de Defensa de la Democracia).

El movimiento de derechos humanos repudió el ataque pero no pudo evitar quedar deslegitimado ante buena parte de la opinión. Las imágenes transmitidas por la televisión trajeron a la memoria recuerdos poco gratos de los años setenta, permitiendo por primera vez desde Malvinas que los apologistas del terrorismo de Estado expusieran sin descaro sus argumentos a favor de la tesis del aniquilamiento: esos revolucionarios incorregibles tarde o temprano traicionarían todo acuerdo de convivencia; con ellos la guerra debía ser a muerte.

Alfonsín recorrió el regimiento recuperado, intentando salvar algo de la autoridad del gobierno constitucional, pero cedió a la evidencia de la victoria que habían obtenido las Fuerzas Armadas: creó un Consejo Nacional de Seguridad integrado, entre otros, por los tres jefes de Estado Mayor, que en la práctica desconocía la prohibición impuesta a los militares, poco antes sancionada en la Ley de Defensa, de participar en la seguridad interna.

### **¿Qué quisieron hacer el MTP y Gorriarán Merlo? ¿Por qué tomaron esa decisión?**

Todo hace pensar que la acción del grupo guerrillero tomó por sorpresa a las autoridades civiles. Tampoco parece haber habido ninguna señal anticipatoria en los servicios de inteligencia. Al menos en los norteamericanos, españoles y argentinos (la “sorpresa” de todos ellos es el tema de un cable del 30-01-89, 19890130 Cooperation with the GOA, en que el canciller argentino Dante Caputo pide urgente ayuda para obtener información). La sospecha que muchos analistas han dejado correr desde entonces, en cuanto a que habría habido una operación encubierta, que en alguna medida alentó o manipuló a los atacantes, no puede constatararse. Al menos las fuentes a las que se tiene acceso parecen dar aliento a una explicación distinta: que el grupo atacante fue exitoso en aislarse y pasar desapercibido en la etapa preparatoria del asalto. Si no era del todo desconocida su existencia, sí lo fueron al menos sus intenciones (esta es la conclusión que extrae otro cable de ese mismo día, 19890130 Some reflections).

Tal vez podría reforzarse esta hipótesis si la conectamos con el peculiar contexto en que dicho grupo actuó, o mejor dicho, creyó actuar: una crisis política y económica aguda,

en que la autoridad presidencial se consumía, encaminándose a una casi segura derrota electoral, y al mismo tiempo profundas fracturas en los actores llamados a beneficiarse de ese debilitamiento, como el Ejército y el peronismo, que les impedían tomar claramente la iniciativa. Combinados, estos elementos parecían definir una ventana de oportunidad para la intervención de grupos minoritarios, más débiles, pero suficientemente decididos como para tomar altos riesgos y sacar provecho del relativo “empate” que trababa al gobierno y sus principales adversarios. Aunque dicho esto, conviene hacer otra salvedad sobre el particular caso de grupo armado del MTP: porque lo cierto es que si algo caracteriza su apuesta fue la enorme desproporción existente entre los recursos con que contaba y la amplitud de los objetivos que se propuso alcanzar en esa coyuntura. Y esa desproporción permite decir que los riesgos que tomó no fueron simplemente “altos”, sino temerarios, desorbitados.

A partir de lo dicho es posible identificar una afinidad estratégica e ideológica entre la apuesta que animó a los asaltantes de La Tablada y ciertos rasgos de las experiencias guerrilleras previas en nuestro país, que aquí simplemente enunciaremos, para volver sobre ellas hacia el final: y es que el “aventurerismo” que animó a los atacantes ese 23 de enero no fue una loca invención de su líder e inspirador, ni el mero fruto de la alienación en que vivían él y su entorno; había sido toda una marca de identidad de los grupos armados más exitosos de los años setenta. Montarse en la ola de movimientos de protesta social relativamente espontáneos que tomaban por sorpresa a los actores políticos tradicionales (como fue el caso con el Cordobazo) y llevar a cabo operaciones armadas que frecuentemente concluían en resonantes fracasos militares pero servían para montar el espectáculo de una guerra civil en ciernes y le otorgaban a la guerrilla visibilidad y credenciales de heroísmo frente a las masas (como sucedió con muchos de los asaltos a unidades militares realizados entre 1972 y 1974) fueron prácticas que abonaron una particular versión del vanguardismo revolucionario: una según la cual sucesivos “saltos cualitativos” llevarían a esas organizaciones, pese a ser muy recientes (como se sabe, los dos grupos más numerosos, ERP y Montoneros, habían sido creados recién en 1970) — Gillespie y Lanusse dicen que Montoneros se habían ido formando desde 1968 para actuar

recién en 1970)-, a “quemar etapas”, asumir en muy breve plazo la conducción del movimiento de masas, y poner en marcha la revolución socialista.

En suma, si la concepción del ataque a La Tablada cabe atribuirla al “aventurerismo” de un grupo muy pequeño y mayormente aislado, que se propuso un “golpe de mano” para hacerse de la conducción y cambiar el curso del proceso de democratización en el país, ello no cabe explicarlo simplemente por el cálculo erróneo de quienes tomaron la decisión, o su incomprensión de los obstáculos estructurales y las limitaciones propias que hacían casi imposible que la operación tuviera éxito; es preciso comprender además el peso de una tradición y de una experiencia históricamente sedimentadas, y la aparente adecuación de las mismas al diagnóstico elaborado sobre las particulares circunstancias que se vivían al final de los años ochenta. Si cruzamos entonces, con esta idea en mente, la información de los documentos desclasificados con los testimonios recogidos, en particular el brindado por Gorriarán Merlo al AHO (AHO, 2004-2005) poco antes de su muerte, se podrá entender el modo en que el proceso político local dio lugar a lo que pareció, a los ojos del núcleo armado del MTP, la ventana de oportunidad para producir un “salto cualitativo” a través de un “golpe de mano”.

Durante los meses finales de 1988 rumores de nuevos alzamientos carapintadas circulaban casi diariamente en los medios de comunicación. Las Fuerzas Armadas, y en particular el Ejército, parecían más divididos que nunca a raíz de los renovados bríos del movimiento carapintada, ahora alineado detrás del coronel Mohamed Alí Seineldín (Aldo Rico, su primer cabecilla, dado de baja a comienzos de ese año), y la ofensiva del sector “legalista” que controlaba la fuerza, y buscó acelerar la purga de elementos rebeldes de las filas previendo que un triunfo del peronismo en las elecciones presidenciales del año siguiente le impondría limitaciones para hacerlo en el futuro, e incluso podría llevar al encubramiento de los rebeldes. Esto venía abonado por la aproximación de Seineldín al entorno de quien había sido electo candidato del peronismo a la presidencia en julio de 1988, Carlos Menem. Menem hizo suyos algunos de los reclamos de los carapintadas, y dio un tono nacionalista y “malvinero” a su campaña electoral. El sector renovador del partido, igual que muchos dirigentes ortodoxos, tanto políticos como sindicales, buscaban en

cambio establecer acuerdos con el empresariado, con la diplomacia norteamericana y con otros factores de poder cuyo favor preveían les haría falta para controlar la situación una vez que se hicieran del gobierno, así que veían estas cercanías con los carapintadas como altamente inconvenientes. En parte por el temor a que los “legalistas” los hicieran del todo a un lado con los ascensos, pases a retiro y asignación de puestos de mando que se decidirían en diciembre de 1988, en parte por la sospecha de que esos factores de poder “moderadores” que actuaban en el PJ y su entorno finalmente convencerían a Menem de soltarles la mano, los carapintadas realizaron un nuevo alzamiento en Villa Martelli, muy cerca de la Capital Federal, el 1ro de diciembre de 1988. La crisis se resolvió con un acuerdo a favor del *statu quo* entre Seineldín y el jefe del Ejército, Dante Caridi. Acuerdo éste que expresó, contra la tesis del “golpe en ciernes”, que al ahora jefe carapintada, igual que a su antecesor, le alcanzaba con una asonada para lograr sus objetivos: su cometido había sido dejar sentado que no podría ignorarse su presencia y la de sus seguidores en la toma de decisiones políticas y militares. Habiendo anoticiado de ello tanto al generalato como a Menem, se replegó. Aunque, de todos modos la intranquilidad siguió presente en los cuarteles, y la sospecha de que en cualquier momento podría volver a estallar un conflicto acompañó el inicio del nuevo año (19881206 Argentine military rebellion).

1989 se inició además con una agudización de la crisis económica, que dejó ya por completo inerte al gobierno nacional: una fuerte sequía provocó un magro resultado de la cosecha y por tanto una caída en el ingreso de divisas por exportaciones y en la oferta de alimentos en el mercado interno, a la vez que redujo la producción de energía proveniente de las usinas hidroeléctricas, lo que derivó en masivos cortes de electricidad a los hogares en las grandes ciudades. El empresariado, que a mediados del año anterior había dado un módico aval al último esfuerzo antiinflacionario del Ejecutivo, desistió de seguir acompañándolo, aun a la distancia, y se preparó para lo que parecía el inevitable triunfo del candidato opositor en las elecciones presidenciales programadas para mayo. La presión sobre el dólar, y por tanto también sobre los precios, se agudizó. Los organismos internacionales de crédito anunciaron durante ese mismo mes de enero que ya no concederían nuevos créditos al gobierno.

Este fue el marco en que tomaron la decisión de actuar Gorriarán Merlo y sus seguidores. Más allá de una probable operación de los servicios de inteligencia sobre ellos (algunos de los sobrevivientes de grupo atacante relatarían que habían recibido informes precisos de una fuente militar según los cuales el golpe estaba ya en marcha el 23 de enero, y sus cabecillas estaban en La Tablada) pesaría su disposición a creer en todo tipo de conspiraciones y a concebir la lucha política como choque entre elites selectas dispuestas a todo (incluido, claro, el uso de las armas). Y por sobre todo, la convicción de que, estando el Ejército y el peronismo divididos, y el gobierno nacional profundamente debilitado por la crisis económica, un acto audaz que ninguno de ellos había tenido en sus cálculos podría influir decisivamente en los acontecimientos.

El MTP, como adelantamos más arriba, denunció días antes del copamiento (y evocando equívocamente el “pacto militar sindical”), un entendimiento entre Menem, el jefe de la UOM, Lorenzo Miguel, y Seineldín para conspirar contra la estabilidad institucional. La denuncia pasaba por alto las pruebas que los tres habían dado ya, más allá del ejercicio de todo tipo de presiones sobre el gobierno y entre sí, de que mayormente confiaban, con total racionalidad, en la vía democrática para lograr sus objetivos. Según Gorriarán Merlo, el objetivo carapintada era “promover a Seineldín como jefe del Ejército... la liberación de los comandantes... y la sustitución de Alfonsín por Víctor Martínez, a quién consideraban afín” (Gorriarán Merlo, AHO 2005). Para el líder guerrillero, esta ofensiva carapintada obedecía fundamentalmente al resignado pactismo con que el gobierno de Alfonsín había querido resolver el desafío que las sublevaciones le plantearon. Un argumento que, como se sabe, contaba con muchos adherentes tanto fuera como incluso dentro del propio gobierno radical. Es así que el “golpe de mano” con que el MTP buscaría cambiar el curso de los acontecimientos se inspiraba no sólo en una confusión de sus líderes y militantes, o mejor dicho, lo hacía en una confusión que no era sólo de ellos. Recogían postulados muy difundidos en la política de esos años, para llevarlos a una versión extrema: por un lado, la idea de que a Alfonsín le había faltado “decisión” para convertir Semana Santa en una pueblada y un triunfo definitivo de la democracia y la revolución sobre el autoritarismo y la reacción; por otro lado, la presunción

de que la crisis política expresaba un “equilibrio de poder”, un empate que impedía la “resolución del conflicto”.

Tanto en los documentos del Departamento de Estado como en los testimonios de los funcionarios civiles y militares entrevistados se considera la idea de un “golpe en ciernes” poco menos que como una fantasía. Se abona sí la idea de que el clima de incertidumbre está favoreciendo un juego extorsivo. Pero no se vincula directamente a Menem en estas operaciones: más bien éste aparece interesado en acorrallar pero no ahogar al gobierno, y si a cada uno de sus interlocutores le dice lo que éstos quieren escuchar es para aumentar sus márgenes de libertad y no cerrarse ninguna posibilidad de la que pudiera sacar provecho luego de las elecciones.

Entonces, ¿cuál fue la contribución de los actores políticos, en particular sectores del gobierno, en los hechos de La Tablada? ¿Qué actitud adoptó la oposición, colaboró en alguna medida con el gobierno o buscó sacar el máximo provecho de la debilidad que el mismo padecía? ¿Qué papel tuvieron a este respecto los sectores en que estaba entonces dividido el Ejército? ¿Intervinieron en el hecho gobiernos extranjeros ideológicamente afines al grupo atacante y que habían financiado algunas de las actividades del MTP? ¿Qué actitud adoptaron los diplomáticos argentinos y norteamericanos ante esa posibilidad, agitaron esas sospechas para sacar algún provecho internacional o doméstico, o hallaron alguna evidencia sólida al respecto?

Los documentos obtenidos del Departamento de Estado, conteniendo las minutas de conversaciones entre funcionarios de la embajada norteamericana y funcionarios, líderes opositores o uniformados argentinos en los días posteriores al ataque revelan varios hechos: la ya mencionada carencia de información de inteligencia sobre el grupo atacante, sus intenciones y vinculaciones, las razones de política doméstica que impulsan al gobierno radical a atribuirle lazos internacionales a los conductores del MTP, y la preocupación por el avance de los uniformados, no sólo de parte de los funcionarios de dicho gobierno sino también de sectores del peronismo, que eran plenamente conscientes de que heredarán un

serio problema de seguridad y descontrol de la fuerza militar, que el episodio podía agravar hasta volverlo inmanejable. A continuación pasaremos revista a estos asuntos.

### **El papel de la oposición y las luchas internas en las FFAA**

No fueron pocos los que resultaron víctimas de la confusión que el MTP buscó usar en su provecho. En la mañana del 23 de enero, Menem atribuyó la operación a los carapintadas y al “incumplimiento por el gobierno del pacto acordado con el coronel Seineldín” (*Clarín*, 24-01-89). A las pocas horas se corrigió, y comenzó a acusar a sectores oficiales de ser sus autores intelectuales, actuando a través de “*El Ciudadano, El Periodista... por ahí también Página 12*, (en) una maniobra... para destruir al justicialismo (*Clarín*, 26-01-89)”, invirtiendo los términos del MTP, y los de su previo razonamiento.

En los días siguientes Menem y su sector insistirían con esta segunda versión: se echó a rodar la versión, probablemente surgida de las propias filas carapintadas, respecto a un vínculo estrecho entre dirigentes del MTP y los funcionarios radicales provenientes de la Junta Coordinadora Nacional (JCN) (no era un secreto para nadie que muchos prominentes líderes del ERP-PRT provenían de familias radicales, y algunos dirigentes del MTP, como Francisco Provenzano, mantenían vínculos con la JCN y diálogos frecuentes con funcionarios de ese sector, fruto de esa filiación, al respecto, 19890126 Peronists on La Tablada incident.). Aunque simultáneamente, tanto en sus contactos reservados con el gobierno como con la diplomacia norteamericana, parece haber primado entre los peronistas el interés por calmar las aguas y no agravar la situación que vivía el gobierno. Un cable de la embajada norteamericana en Buenos Aires (19890126 Peronists on La Tablada incident.) reporta consultas con

*“expertos peronistas que desestiman vínculos con gobierno radical y también la supuesta conspiración militar, explicando que los documentos de los atacantes son reveladores del grado de irracionalidad de sus análisis y metas. Explican el problema de involucrar a*

*FFAA en seguridad interior y la necesidad de que Alfonsín no ceda y el gobierno de Estados Unidos apoye la formación de policía antiterrorista fuera de control militar”.*

Ello ilustra un punto interesante respecto a la relación entre el peronismo, sobre todo el sector menemista, y los carapintadas antes y después de La Tablada. Como ya dijimos, entre fines de 1988 y enero de 1989 esa relación fue muy intensa, aunque también estuvo cargada de desconfianza, sobre todo del lado de los carapintadas: en esta etapa, Seineldín realizó una intensa tarea de denuncia sobre la amenaza que supuestamente revestía para Menem la jefatura de Ejército: incluso denuncia un posible golpe para evitar su asunción (19900111 Seineldín's Córdoba visit). Sindicalistas del SUPE y peronistas de derecha como Villafañe Molina promueven visitas de Seineldín a unidades básicas y locales gremiales de todo el país en que se discute sobre estos peligros y sobre el papel de los carapintadas como “garantes” de un futuro gobierno peronista (19900111 Seineldín's Córdoba visit). Después de La Tablada, en cambio, en el peronismo priman las preocupaciones que el cable del 26 de enero transmite: y es que es la conducción de la fuerza la que se ha fortalecido, extrayéndole concesiones al gobierno y presentándose frente a la sociedad como la necesaria “guardiana de la democracia” frente a quienes la amenazan; y por tanto es razonable estimar por un lado que el principal problema para los políticos civiles será evitar que este avance continúe, y en segundo lugar, que para un futuro gobierno será inevitable negociar con esa cúpula castrense.

### **Los vínculos e influencias internacionales de los atacantes**

Las versiones sobre vinculaciones internacionales del grupo atacante, enfocadas particularmente en Nicaragua y Cuba, merecieron mucha más atención en los cables diplomáticos de los días subsiguientes al hecho. Pero lo más curioso no es que se estableciera esa relación, dados los antecedentes de la guerrilla latinoamericana y en particular de este grupo, algo muy esperable, sino que la usina principal de estas versiones fuera el propio gobierno radical antes que fuentes internacionales y de inteligencia.

En un diálogo con funcionarios de la embajada, el entonces ministro de Interior, Enrique Nosiglia (19890127 Nosiglia specifies ties) reporta sobre los vínculos entre el MTP y los sandinistas, y prevé una reacción muy dura al respecto de parte de Alfonsín, tomado de sorpresa por el ataque y, siempre según el ministro, ofuscado por la “traición” que Managua había cometido contra su gobierno. Por cierto, el solo hecho de haber mantenido ocultos los planes del MTP al gobierno argentino podía considerarse una muy desleal contraprestación por los esfuerzos que Alfonsín en persona había hecho a favor de la iniciativa de pacificación para América Central del Grupo Contadora. Nosiglia se esmera además en dejarle en claro a los diplomáticos norteamericanos que el gobierno argentino no dudará en sacar a la luz los vínculos del grupo atacante con el Ejército y la policía sandinistas, vínculos que se ocupa en detallar: mencionando a Roberto Sánchez, ex jefe de policía de Managua, a “la negra” Sánchez, a Claudia Lareu y a Martín “el inglés”, oficiales del ejército nicaragüense, entre otros. Desestima, por último, la posibilidad de que el ataque de paso al resurgimiento de la guerrilla de izquierda, ya que cree que el grupo puso “todo lo que tenía” en la operación, y si pasó desapercibida su actividad fue precisamente porque era un grupo muy pequeño. Ello alcanza, según Nosiglia, para desestimar las acusaciones sobre supuestos los lazos con la JCN y con él en particular, que son el foco de las denuncias de Menem, a quien acusa de irresponsable (19890127 Nosiglia specifies ties).

Lo sorprendente del caso es que pocos días después, el 30 de enero, la embajada informaría al DOS que, pese al énfasis que pone en conseguir datos sobre los lazos internacionales de los atacantes, que involucren en particular a Managua, “no hay ninguna evidencia firme de un vínculo directo con el ataque” (19890130 La Tablada investigations). Los testimonios recogidos confirman esta afirmación. Es más, los funcionarios radicales de entonces recuerdan el esfuerzo que la Cancillería argentina había hecho para que Cuba y Nicaragua le quitaran todo respaldo a Gorriarán Merlo y sus seguidores (Caputo, AHO **FECHA?**). Y el propio jefe guerrillero confirma que esas gestiones existieron y que no tenían apoyo externo.

En otro cable de ese mismo día, es el turno de Caputo para buscar ayuda en los norteamericanos en el esfuerzo por ligar al MTP, ahora a Noriega y el gobierno panameño: el canciller argentino, según relata el cable, pide información a la embajada sobre posibles lazos entre Noriega, el ministro del interior sandinista Tomás Borge, y los atacantes (19890130 Cooperation with the GOA) Para Caputo sacar a luz estas conexiones es particularmente problemático porque ellas revelarían que su política de “contención” del sandinismo había fracasado (al respecto, cable 19890130 Some reflections).

Poco tiempo después, harán gestiones similares Horacio Jaunarena, ministro de defensa, apuntando a Cuba, Nicaragua e incluso la Unión Soviética, y otros funcionarios de menor jerarquía (19890207 Argentine inquiry about). Jaunarena, en su diálogo con el embajador explica que La Tablada habría tenido un “efecto beneficioso”, al haber “unido al gobierno y las FFAA en la lucha contra el terrorismo de izquierda”, y que aquél podría extraer incluso beneficios electorales. Habla también de información de los soviéticos sobre el ataque, sin brindar mayores detalles. El embajador, en su reflexión posterior, se muestra comprensiblemente sorprendido por esas especulaciones.

Por su parte, la inteligencia española, y el propio Felipe González, según se informa en otro cable, habrían brindado algún dato sobre la relación entre Borge y Noriega en el sostén del MTP, así como sobre la posibilidad de réplicas del ataque en otros países de la región (19890126 Felipe Gonzáles tells Alfonsín). Pero los norteamericanos, más allá de que públicamente darán aliento a esas acusaciones, y proponen incluso extenderlas a Cuba, no confirman tales sospechas. Pese al interés que evidentemente tenían en hacerlo. Lo que hace pensar que ellas carecían realmente de sustento. Es más, en otro cable (19890130 Cooperation with the GOA) explican abiertamente todas estas versiones como fruto de una necesidad de la política doméstica:

*“al gobierno argentino le interesa descubrir vínculos externos de la conspiración como una forma de desviar atención de explicaciones meramente locales”.*

Evidentemente, el gobierno radical necesitaba subrayar, aun basándose en meras versiones, las conexiones internacionales del MTP, porque de ese modo le quitaba sustento y relevancia a las acusaciones que dirigía contra él la oposición peronista, y también para justificar la violación de la Ley de Defensa que suponía el haber aceptado la participación de los militares en el Consejo Nacional de Seguridad: si la amenaza que se enfrentaba no era sólo interna, sino también externa, entonces podría alegarse que no había tal violación. Por otro lado, puede que para Alfonsín y sus colaboradores la denuncia de la intervención cubana y sandinista tuviera aun otra motivación: la de obtener un más decidido respaldo de EEUU, ahora que parecía estar más que nunca, al borde del abismo. Aludimos ya a la decisión de los organismos de crédito, ese mismo mes de enero, de no conceder nuevos fondos al país. Cualquier ayuda que se pudiera obtener de Washington en estas circunstancias, cualquier gesto de apoyo siquiera, tendría un enorme valor. Así quedó en evidencia cuando Caputo visitó Washington a fines de febrero de 1989, y mencionó públicamente el vínculo de los guerrilleros de La Tablada con Nicaragua (19890222 Argentine impact of Quayle-Caputo meeting.).

La conclusión que se desprende de los documentos norteamericanos es que se trata de un fenómeno esencialmente local y acotado. Además, queda en evidencia que la diplomacia norteamericana, a diferencia de algunos actores locales, entre ellos el propio grupo atacante, no temía un golpe en Argentina. Su preocupación por la situación económica era seria, pero tal vez porque no consideraba la posibilidad de una intervención militar, estimaba que las elecciones descomprimirían la situación. De allí que no interviniera en mayor medida en apoyo de la gestión saliente. Ni siquiera después de La Tablada.

## **Conclusiones**

Que el ataque del 23 de enero de 1989 haya sido el fruto de la inventiva y el accionar de una “patrulla perdida” no significa que el hecho se pueda explicar por la sola consideración de las motivaciones y cálculos de sus directos responsables: influyeron en él

decisivamente tradiciones y experiencias de larga data en la izquierda revolucionaria argentina y latinoamericana, así como una particular situación política en que se trababan en un conflicto muy complejo, el gobierno radical, la oposición peronista y las distintas facciones militares. El contexto internacional también intervino para hacer posible el episodio: el triunfo todavía fresco de la revolución sandinista actuó como un estímulo a favor de la lucha armada tanto en América Central como en América del Sur, especialmente en Chile y Perú. Si ese influjo llegó un poco tarde a Argentina no fue por ello menor: a partir de las sublevaciones carapintadas una porción nada desdeñable de la izquierda, que incluía a sectores del propio partido radical, estimó que era preciso recurrir a la movilización de masas y a la construcción de un amplio “frente popular” para que la democracia no se viera obligada a pactar con las Fuerzas Armadas su sobrevivencia. La reivindicación de la lucha armada sería una versión extrema de estas tesis, para nada compartida por la mayoría de la izquierda, pero que logró algún eco marginal en ella en este contexto.

Eso fue suficiente para que el núcleo armado y clandestino que orientó al MTP desde fines de 1987 pasara a la acción. Lo hizo asumiendo que la precariedad de sus respaldos organizativos y sociales podría ser compensada con suficientes dosis de arrojo e inventiva. Retomando una experiencia que había sido muy exitosa entre 1970 y 1975, en la que el uso de la violencia, antes que pieza de una estrategia militar, había sido el medio para montar un espectáculo acorde a las necesidades de la propaganda revolucionaria, creando la ilusión de un desafío a la capacidad estatal de mantener el orden, aún al precio de sacrificar cuantiosos recursos humanos en choques armados militarmente insostenibles.

No podemos contestar taxativamente a la pregunta respecto a si hubo o no ingerencia de los sandinistas o los cubanos en la operación. Los documentos desclasificados lo que muestran es que denunciarla fue una táctica del gobierno radical motivada más en razones domésticas que en datos fidedignos. Tampoco podemos afirmar si hubo o no una operación de contrainteligencia de los militares argentinos sobre el MTP. Lo que sí podemos decir es que no necesitó haber ni una cosa ni la otra para que Gorriarán Merlo y sus seguidores hicieran lo que hicieron.